



En Energía, Chile construyó la casa por el techo

Leía hace un tiempo atrás acerca de la decisión de Naturgy de poner a la venta su negocio de energías renovables en Chile; claramente esto no es un accidente aislado, sino que es el síntoma más visible de una transición energética hecha al revés. La empresa española ha reclasificado sus sociedades renovables en Chile como “activos mantenidos para la venta” porque lisa y llanamente no cumplen los requisitos mínimos de rentabilidad que exige el grupo. Y nótese, no estamos hablando de proyectos marginales. Naturgy opera el parque eólico Cabo Leones II (206 MW) y la planta fotovoltaica San Pedro (106 MW), en el desierto de Atacama, financiados por unos 280 millones de dólares. Visiblemente son activos eficientes en una de las zonas con mejor recurso solar y eólico del planeta, pero atrapados en un sistema que no puede llevar esa energía por todo Chile. RWE Chile también se retira este año, tomemos en cuenta que actualmente tiene un portafolio de proyectos eólicos y solares en desarrollo de más de 2.5GW. YA en el 2023 Europa estaba preocupada por la insolvencia de varias empresas de energía renovable en Chile. Entendiendo que la Ley de Transición Energética promulgada en diciembre de 2024, que tiene como principal objetivo posicionar a la transmisión eléctrica como pilar para la descarbonización y acelera la integración de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional, no ha provocado el cambio que se necesita.

Según un balance de mercado divulgado en enero de 2026 (estimaciones de Broker & Trader

Energy Chile), el curtailment renovable (o vertido de energía, que es la reducción intencionada de la producción de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables como la solar o la eólica) en Chile llegó a 6,2 TWh (1 TWh equivale a 1000 GWh y 1 GWh equivale a 1.000 MWh megavatios-hora) en 2025, con especial incidencia en Antofagasta y Atacama y desde 2022 los vertimientos representaron pérdidas por \$562 millones de dólares (Sí, así botamos la plata, a veces). Un informe de Ember (think tank” energético con sede en el Reino Unido) recordaba que minimizar estos vertimientos es una condición básica para capturar el potencial renovable del país; pero ¿qué hacemos? seguimos sumando megas de generación sobre una red de transmisión congestionada y una planificación que está siempre llegando tarde. En 2024 ya habíamos perdido energía solar suficiente para más de 2 millones de hogares, y aun así las cuentas de la luz no bajan: la ineficiencia se socializa, el despilfarro no se ve claramente en la boleta, pero la pagamos igual todos los chilenos. Gran parte de estos hechos han sido dados a conocer en varias ocasiones por Wilmar Suárez, experto en el área.

Si miramos estos hechos y datos, aparecen algunas paradojas que Thomas Sowell resume con la idea de “consecuencias no intencionales”: se prometió que llenar el norte y otros lugares de nuestro querido Chile de paneles y aerogeneradores abarataría la energía y descarbonizaría la matriz, pero se omitió un detalle “no menor”: la carretera eléctrica. Políticamente era más vistoso

cortar cintas en parques solares que pelear servidumbres, permisos y trazados para nuevas líneas, y hoy recogemos los resultados: energía limpia que se bota, inversiones que se fugan y chilenos que siguen pagando una energía que es muy cara. Con esto, podemos inferir que hemos caídos en una “falacia sin resultados”: se asumió que, si cada proyecto renovable individual era bueno, la suma automática de proyectos sería necesariamente buena para el país y para las cuentas de los hogares. Es una variante de la falacia de la composición: lo que es deseable parte por parte no lo es necesariamente en el conjunto si faltan piezas críticas como transmisión, almacenamiento y reglas claras de mercado.

Mientras tanto, México vuelve al radar global con un diseño que, aunque lejos de perfecto, al menos intenta ordenar primero la cancha. La Comisión Federal de Electricidad lanzó un esquema mixto que ya recibió 222 propuestas por casi 38 GW, frente a una demanda inicial de 7,5 GW, combinando generación renovable y almacenamiento bajo contratos de largo plazo y un rol articulador del Estado. Allí están discutiendo simultáneamente dónde se requiere la energía, cómo se conecta y bajo qué reglas se reparten riesgos y beneficios entre lo público y lo privado; no se limita a multiplicar parques desconectados de la realidad del sistema. Nosotros, en cambio, hemos sido ejemplar en los discursos (como los de Al Gore en su momento) – neutralidad de carbono, cierres anticipados de centrales a carbón, cumbres climáticas– y erráticos en la ejecución. Se anuncian rimbombantes metas de descarbonización cada vez más ambiciosas, se celebra la entrada de grandes actores internacionales, pero no se corrigen los incentivos que castigan al que invierte donde el sistema no puede absorber su energía. Naturgy no se va porque



el sol deje de brillar en Atacama, sino porque el modelo de negocios que le ofrecimos es inconsistente: se le pidió apostar a largo plazo en un tablero que se reescribe sobre la marcha.

La moraleja es incómoda: la transición energética no fracasa por culpa de la tecnología, sino por la inoperancia política y regulatoria. No basta con repetir que “las renovables son más baratas” si diseñamos un sistema que obliga a botar energía limpia o a pagar compensaciones millonarias por desconectarla de la red. Chile todavía puede corregir el rumbo, pero eso exige algo menos glamoroso que un parque solar nuevo: planificar en serio la red, asumir costos políticos hoy y reconocer que los errores de diseño también tienen consecuencias, aunque nadie los vea en las fotos oficiales. Como consuelo, recién después de 2029 proyectos de infraestructura que reducirán los vertimientos entrarán en operación. Mientras tanto sigamos pagando la ineptitud y poca diligencia.

Dr. Ulises Alarcón G.
Académico